



Resolución 2020R-1307-18 del Ararteko, de 14 de julio de 2020, por la que recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que revise la decisión de Lanbide que declara la suspensión y la posterior extinción del derecho a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda de la reclamante, al entender que cumple los requisitos para ser titular de las referidas prestaciones, y en aplicación de la consideración primordial del interés superior de los menores que se encuentran a cargo de aquélla.

Antecedentes

1. Una persona, titular de la renta de garantía de ingresos (en adelante RGI) y de la prestación complementaria de vivienda (en adelante PCV), solicitó la intervención del Ararteko con fundamento en el retraso de Lanbide en proceder a la reanudación del abono de ambas prestaciones, tras una suspensión.

Finalmente, Lanbide acordó la extinción del derecho a las prestaciones de la reclamante tras haber mantenido en suspenso las mismas por un tiempo superior a doce meses.

2. La reclamante, de origen nigeriano y de 69 años de edad, es guardadora de hecho de su nieto y de su nieta, menores de edad a cargo, también originarios de Nigeria, que viven en la Comunidad Autónoma del País Vasco con su abuela para poder disponer de un futuro mejor. No obstante, tras la suspensión, los únicos ingresos de la unidad de convivencia (en adelante UC), ascendían aproximadamente a 300 euros, que percibía la interesada en concepto de prestación no contributiva (PNC).

En lo que refiere a la guarda de hecho, esta institución ha podido constatar que mediante auto 2515/2017, de fecha 1 de septiembre de 2017, el Juzgado de Primera Instancia nº14 de Bilbao nombró a la reclamante guardadora de hecho de su nieto y de su nieta, en ese momento de 11 y 7 años de edad, respectivamente.

Dicho auto, en su disposición primera, requiere a la designada guardadora *“para que, una vez acepte el cargo, formalice el oportuno inventario de bienes”*. Además, indica que aquélla *“deberá rendir cuentas anuales de su gestión a fecha 31 de diciembre de cada anualidad, dicha rendición consistirá en una relación detallada de los gastos e ingresos acaecidos en el patrimonio del menor, relación que habrá de ir acompañada de documentos originales justificativos de los mismos”*.





Del mismo modo, esta institución también ha podido constatar que la reclamante dio debido cumplimiento a sus obligaciones como titular de la guarda de sus nietos. Consecuentemente, con fecha 8 de noviembre de 2017 el mencionado juzgado dictó el decreto de aprobación del inventario de bienes de los menores, presentado por la reclamante con fecha 18 de octubre de 2017. Y con fecha 16 de febrero de 2018 aprobó, mediante auto, la rendición de cuentas presentada.

3. En el momento de la presentación de la queja ante esta institución, Lanbide había acordado, mediante resolución de fecha 21 de abril de 2018, la suspensión temporal del derecho a la RGI/PCV de la promotora de la misma con el siguiente fundamento:

“No aclara la documentación requerida en el Trámite de Audiencia. Se le pide que aporte una copia del inventario de bienes de los nietos aportada en el juzgado de 1ª instancia nº 14 de Bilbao, y se limita a presentar el Auto nº 749/2018 que indica que aprueba la cuenta presentada”.

4. No obstante, en su queja, la interesada argüía haber presentado ante Lanbide la documentación requerida en más de una ocasión.

En esta línea, cabe añadir que de los documentos que forman parte de este expediente de queja es posible concluir que la interesada presentó en Zuzenean, con fecha 25 de mayo de 2018, testimonio, del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Bilbao, del expediente de guarda de hecho número 1142/2017.

En el mismo figura la siguiente documentación:

1. Acta de aceptación de cargo de 4 de octubre de 2017.
2. Escrito encabezado como *“Presentación de Inventario de Bienes”*, de fecha 18 de octubre de 2017, dirigido a ese juzgado, en el que se aprecia que no hay escrito ningún bien a nombre de los nietos de la reclamante porque éstos no poseen ni bienes ni son titulares de cuenta bancaria alguna.
3. Decreto del juzgado de fecha 8 de noviembre de 2017 que aprueba el inventario de bienes referido.
4. Certificado expedido por el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, de fecha 11 de mayo de 2018, del que resulta que los nietos de la reclamante no son titulares ni de bien ni de cuenta bancaria alguna.





5. Dicho lo cual, cabe señalar que la promotora de esta queja solicitó formalmente la reanudación del abono de las prestaciones el día 2 de julio de 2018, al entender que había dado cumplimiento debido al requerimiento realizado por Lanbide.
6. Con el fin de dar el trámite adecuado a la queja planteada, el Ararteko remitió una primera petición de colaboración al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. En la misma, solicitó información sobre la fecha en la que se procedería a reanudar el abono de las prestaciones, entendiendo que había decaído la causa que motivó la suspensión del derecho a las mismas.
7. En contestación a dicha petición de colaboración, tuvo entrada en el registro de esta institución un escrito del director general de Lanbide que informaba al Ararteko que ese organismo mantenía el estado de suspensión del derecho a la RGI/PCV de la reclamante, porque consideraba que no había sido aportada aún la documentación requerida.

En ese sentido, en síntesis, el director general de Lanbide trasladó al Ararteko lo que sigue:

*“Hay que decir que la única documentación aportada a Lanbide es el auto nº 749/2018 del mismo juzgado en el que se dice **“Que se tiene por cumplida la obligación de informar y rendir cuenta anual de la administración de los bienes de este/a”**.*

*Pero la documentación que se le requiere, (reiteramos) es **“Copia del Inventario de bienes presentado ante el juzgado de Primera Instancia nº 14 de Bilbao”, con la advertencia de que deberá ser una COPIA EXACTA A LA PRESENTADA EN EL JUZGADO. También puede pedir una copia de la misma en dicho juzgado”**.*

Entendemos que no es en ningún caso abusiva la petición de dicha documentación ya que es obligación de Lanbide la comprobación del patrimonio de las personas que forman parte de la UC”.

8. Por otra parte, de la documentación que forma parte del expediente de queja se extrae que Lanbide, mediante trámite de audiencia de fecha 10 de julio 2018, requirió nuevamente a la reclamante una “copia exacta” del inventario de bienes presentado ante el juzgado.

La reclamante afirma que, en ese momento, aportó nuevamente la documentación que acredita la carencia de bienes de sus nietos, enumerada en





el antecedente cuarto. Y así parece que se deduce del justificante de entrega emitido por Lanbide con fecha 23 de julio de 2018. Consecuentemente, la reclamante solicitó, nuevamente, con fecha 20 de julio de 2018, la reanudación de las prestaciones.

9. A pesar de todo lo expuesto, con fecha 7 de enero de 2019, Lanbide entregó en mano a la interesada las siguientes notificaciones: el requerimiento a un trámite de audiencia, fechado a 25 de septiembre de 2018, y una resolución de mantenimiento de la suspensión del derecho a las prestaciones, fechada a 19 de diciembre, que se fundamentaba en:

"- No aportar en plazo la documentación requerida. Se le requiere documentación y no la aporta, publicado el requerimiento en el BOE del día 05-11-2018. Se mantiene la suspensión.

- Por desconocimiento de la situación actual por no responder a Trámite de Audiencia. Publicado en el BOE del día 05-11-2018. Se mantiene la suspensión".

Al parecer, y según se extrae del expediente, el 25 de septiembre de 2018 se abrió un trámite de audiencia para que la recurrente aportase los movimientos de cuenta y certificado de bienes del país de origen de los 2 nietos.

Sin embargo, por su parte, la reclamante aseguraba que no se le había notificado dicho trámite. De hecho, refería que durante ese periodo sufría dificultades para caminar, por lo que no había salido de casa, y que por ello estaba segura de que no había recibido notificación alguna de Lanbide.

10. Posteriormente, en el transcurso de la tramitación del presente expediente de queja, la reclamante aportó a esta institución una notificación del inicio de un procedimiento de extinción de las prestaciones por la existencia de dos suspensiones, por incumplimiento de obligaciones, en el periodo de dos años de vigencia de la prestación.

No obstante, tras la presentación de las oportunas alegaciones, la reclamante recibió otra resolución de Lanbide, fechada a 20 de marzo de 2019, que le comunicaba el mantenimiento de la suspensión temporal de las prestaciones, si bien establecía lo que sigue (nº de expediente 2019/REV/003862):

"Estimación de las alegaciones al procedimiento de inicio de extinción con mantenimiento de suspensión".





11. Finalmente, con fecha 11 de abril de 2019, Lanbide le notificó el inicio de un procedimiento de extinción, en base a la "*[a]plicación de lo establecido en el art. 28.1.d) de la Ley 18/2008: Mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado superior a 12 meses*". Extinción que acordó con fecha 24 de mayo de 2019.

12. Con el fin de clarificar algunos extremos que, con fundamento en lo expuesto, presentaban aun cierto grado de confusión, el Ararteko trasladó una segunda petición de colaboración al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. En concreto, solicitó información sobre los siguientes extremos:
 - Copia de los intentos de notificación y de la publicación en el BOPV respecto del trámite de audiencia de septiembre de 2018 que menciona Lanbide para mantener la suspensión del derecho a las prestaciones de la reclamante (2018/REV/095526).
 - Motivos por los cuales Lanbide ha mantenido durante todo este tiempo suspendido el derecho de la reclamante a las prestaciones a pesar de toda la documentación aportada, que por otra parte es la única que consta en el expediente judicial.
 - Información sobre el estado del expediente tras la interposición del último recurso potestativo de reposición, fecha prevista de resolución y en su caso, copia de la misma.
 - Explicación de los motivos por los que se han estimado las alegaciones en el procedimiento de extinción pero se ha mantenido la suspensión del derecho a la RGI y se ha iniciado otro procedimiento de extinción por mantenimiento de la suspensión durante un periodo de 12 meses.
 - Si ha tomado en consideración la primacía del interés superior del menor.
 - Cualquier otra circunstancia que tenga relación con el objeto de la queja y que pueda resultar de interés para nuestra actuación.
 - Su opinión sobre las consideraciones previas trasladadas.

Asimismo, formuló nuevas consideraciones que, para evitar reiteraciones innecesarias, se tienen aquí por reproducidas.

13. En respuesta a esta segunda petición de colaboración tuvo entrada, en el registro de la institución del Ararteko, un escrito del director general de Lanbide mediante el que confirmaba la extinción acordada y trasladaba además lo siguiente:





“Se le suspendió la prestación desde el 01/04/2018 al no entregar la documentación requerida hasta en dos ocasiones en la que se le pedía: INVENTARIO DE BIENES DE SUS NIETOS, tal y como dicta el Juzgado de Primera Instancia N°14 de familia.

Dª XXX presentó Recurso de Reposición el 07/02/2019 que fue desestimado: Adjuntamos resolución.

Transcurrido un año en situación de suspensión, se inicia una revisión automática que termina en Extinción del derecho por “Aplicación de lo establecido en el art. 28.1.d de la Ley 18/2008: Mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado superior a 12 meses”.

Posteriormente, (...) presentó un nuevo recurso de reposición que fue desestimado. Adjuntamos resolución”.

14. Por último, cabe señalar que el informe que Lanbide remitió a esta institución con fecha 27 de noviembre de 2019, tras una reunión mantenida entre el personal del Ararteko y del organismo autónomo, reitera que la extinción de las prestaciones se debe a que la reclamante no había aportado durante todo ese tiempo la documentación requerida a los efectos de conocer el patrimonio e ingresos de la unidad de convivencia

“Destacamos que, entre la documentación requerida por Lanbide y no presentada, se encuentra, no solamente el inventario de bienes al que ya hemos hecho referencia en anteriores contestaciones, sino también los movimientos de cuentas corrientes de los nietos de la administrada, los cuales no son sino el instrumentos necesario para conocer el patrimonio e ingresos de la UC, y determinar, en consecuencia, si la interesada tienen o no derecho a las ayudas económicas de la RGI y la PCV”.

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho suficientes, se emiten las siguientes:

Consideraciones

1. La reclamante tiene atribuida la guarda de hecho de sus nietos, mediante auto 2515/2017, de fecha 1 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia nº14 de Bilbao.

La institución de la guarda de hecho se encuentra actualmente regulada en los artículos 303, 304, y 306 del Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil (en adelante Código Civil).





La guarda de hecho constituye un mecanismo de protección de las y los menores, de carácter provisional y transitorio, tal y como resume la Sentencia del Tribunal Supremo 582/2014, de 27 de octubre de 2014, en su fundamento jurídico noveno¹.

Dado ese carácter provisional y transitorio, el artículo 303.1 del Código Civil, en su versión dada por el apartado 28 del artículo 2 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, contempla una serie de medidas judiciales de información, control y vigilancia del menor hasta que exista una protección definitiva del mismo. Así, este artículo prevé que la autoridad judicial competente puede solicitar a la persona que tiene atribuida la guarda de hecho que informe sobre la situación de los bienes y la persona del menor y de su actuación en relación con los mismos².

En esta línea, el auto de nombramiento de la reclamante como guardadora de hecho de sus nietos estableció su obligación de formalizar el oportuno inventario de bienes de los menores, y la de rendir las cuentas anuales de la gestión realizada.

Parece oportuno recordar ahora que la reclamante dio debido cumplimiento a sus obligaciones. Así como que, en consecuencia, con fecha 8 de noviembre de 2017 el juzgado dictó el decreto de aprobación del inventario de bienes de los menores. Y que con fecha 16 de febrero de 2018 aprobó, mediante auto, la rendición de cuentas presentada.

2. Como se puede extraer de la lectura de los antecedentes, la cuestión de fondo, en el presente caso, gira en torno a la necesidad de conocer los recursos económicos que posee la unidad de convivencia que conforman la interesada y sus nietos. A tal efecto, Lanbide requiere insistentemente a aquélla para que aporte copia exacta del inventario de bienes presentado ante el juzgado, y justifica la exigencia del documento referido en la necesidad de

¹ FJ 9: *“No cabe duda de que la guarda de hecho se concibe como un mecanismo de protección de los menores, pero también que el ordenamiento jurídico la contempla como provisional y transitoria, articulando previsiones que conducen a una protección estable de aquellos”.*

² Artículo 303.1 Código Civil: *“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 228, cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y los bienes del menor, o de la persona que pudiera precisar de una institución de protección y apoyo, y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vigilancia que considere oportunas”.*





constatar el patrimonio de la unidad de convivencia, para poder así determinar si tiene o no derecho a la RGI.

En este sentido, el Ararteko entiende que Lanbide tenga la necesidad de constatar el haber de la UC de la interesada, a los efectos de verificar que cumple con los requisitos para ser titular de la RGI. En esta línea, además, cabe añadir que la letra m) del artículo 29, del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, faculta a la Administración para exigir aquellos documentos que considere oportunos *“a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos”*.

No obstante, lo que resulta difícil de entender es el porqué de la insistencia de que se trate de una copia exacta del inventario referido, cuando la carencia de recursos ha quedado suficientemente acreditada. En primer lugar, porque así resulta del escrito encabezado como *“Presentación de Inventario de Bienes”*, aprobado mediante decreto del juzgado, y aportado a Lanbide hasta en dos ocasiones. Y en segundo lugar, porque así cabe también concluir del Certificado expedido por el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, de fecha 11 de mayo de 2018, presentado en Zuzenean con fecha 25 de Mayo. El inventario de bienes requerido quedó incorporado al expediente judicial de la guarda de hecho, de modo que la interesada lo que ha aportado a Lanbide es un testimonio de éste último del que resulta, del mismo modo, acreditada la carencia de recursos requerida por la ley para ser titular de las prestaciones.

Parece oportuno recordar ahora que el Tribunal Supremo, en su sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 7 de julio de 1997, expresa que:

“...la Administración no puede arbitrariamente exigir cualquier documentación, sino aquella que sea indispensable para fijar los datos en base a los cuales ha de dictarse la resolución”³

En cualquier caso, parece razonable cuestionar la falta de proporcionalidad de la decisión de Lanbide que, al entender, conforme a lo expuesto, que la interesada no cumple con el requerimiento exacto, acuerda primeramente una suspensión, y transcurridos doce meses determina finalmente la extinción de las prestaciones de aquélla; una mujer de 69 años, con dos menores a cargo, cuyos únicos ingresos ascendían aproximadamente a 300 euros.

³ Tribunal Supremo. Roj: STS 4804/1997. [ECLI:ES:TS:1997:4804](https://www.boe.es/boe/idoc?idoc=1997-4804).



3. En otro orden de cosas, esta institución quiere también poner de relieve las importantes deficiencias de carácter procedimental que se aprecian en el asunto que ahora nos concierne.

Así, y en primer lugar, cabe decir que Lanbide acordó el mantenimiento de la suspensión de las prestaciones de la reclamante por *“no aportar en plazo la documentación requerida”* y, unido a ello, por *“desconocimiento de la situación actual por no responder a Trámite de Audiencia”*, de fecha 25 de septiembre de 2018. Dicha resolución fue entregada en mano a la interesada el día 7 de enero de 2019.

No obstante, tal y como se ha señalado en los antecedentes, la promotora de la queja aseguraba que no se le había notificado dicho trámite de audiencia. Esta institución solicitó expresamente a Lanbide información sobre los intentos de notificación y de la publicación del mismo. A pesar de ello, el organismo autónomo no ha adjuntado en sus informes remitidos a esta institución ningún documento referente al procedimiento de notificación que se siguió al efecto.

En este sentido, el Ararteko quisiera recordar que, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco tiene *“el deber de aportar con carácter preferente y urgente, cuantos datos, documentos, informes o aclaraciones le sean solicitados”*.

En cuanto al trámite de audiencia previo, tal y como señalábamos en el Informe-Diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de RGI-PCV por Lanbide, 2017⁴, el Ararteko ha mantenido una posición garantista defendiendo la importancia del mismo tanto en los casos de existencia de indicios de pérdida de requisitos como de incumplimiento de obligaciones.

La RGI es una prestación que se destina a hacer frente a las necesidades más básicas de aquellas personas que se encuentran en situación o procesos de exclusión, por lo que la interrupción de su abono debe tener motivos fundados que deben ser comunicados con carácter previo a la persona que pueda verse afectada por una decisión de este tipo. El conocimiento de los hechos y de los fundamentos legales en los que se basa la misma les permite presentar alegaciones en su defensa.

⁴ **Euskadi. Ararteko.** Informe-diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de RGI y PCV por Lanbide [en línea]. Vitoria-Gasteiz: Ararteko, 2017, pp. 33 y 34. Disponible en: <http://www.ararteko.eus>



Además, en esta línea, la sección 4ª del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos (arts. 53 y siguientes), establece las normas comunes a los procedimientos de modificación suspensión o extinción de la RGI. Aquí, el artículo 53.2 prevé la práctica de un trámite de audiencia previo a la adopción de la resolución en cuestión.

Por añadidura, y en conexión con lo dispuesto hasta ahora en esta consideración tercera, cabe recordar que de conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), la práctica de las notificaciones en papel debe cumplir las siguientes previsiones:

“Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44”.

4. Asimismo, parece oportuno señalar que la actuación de Lanbide ha podido ocasionar indefensión a la interesada, y ello porque del análisis de las comunicaciones recibidas se extrae la falta de seguridad jurídica generada.

Así, la arriba mencionada resolución de Lanbide, de 20 de marzo de 2019, comunicó a la reclamante el mantenimiento de la suspensión temporal de las prestaciones de una forma confusa, contradictoria y carente de fundamentación: *“Estimación de las alegaciones al procedimiento de inicio de extinción con mantenimiento de suspensión”.*

En este sentido, cabe recordar que la motivación de cualquier acto administrativo supone la expresión de los motivos que sirven de fundamento a la decisión adoptada, tal y como se desprende del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las





Administraciones Públicas⁵. Además constituye un elemento esencial en el control de la discrecionalidad administrativa, así como un requisito fundamental para permitir su fiscalización y evitar la indefensión de las personas que, en otro caso, podrían verse privadas de los argumentos para combatir las decisiones administrativas.

La necesidad de mejorar la motivación de las resoluciones, con una sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos de derecho en los que se basa, ha sido señalada en numerosas ocasiones por el Ararteko, tanto en la tramitación de los expedientes de queja, como en el Informe-Diagnóstico de 2017⁶. Además, fue objeto de la Recomendación general del Ararteko 1/2014, de 20 de enero⁷, donde se estudiaba la importancia de la motivación de las resoluciones como garantía del derecho a una buena administración.

Por todo ello, el Ararteko insiste, nuevamente, en la necesidad de motivar adecuadamente las resoluciones administrativas, de modo que se traslade la información necesaria a las personas titulares del derecho a la renta de garantía de ingresos, a los efectos de que puedan defenderse contra aquéllas que limitan o restringen sus derechos.

5. En esta línea, parece oportuno añadir que, en la tramitación del presente expediente se ha observado que el documento que Lanbide ha requerido a la interesada ha sido, en todo momento, el inventario de bienes de sus nietos. No obstante, en el requerimiento al trámite de audiencia de fecha 25 de septiembre de 2018 le exige que aporte el certificado acreditativo de la carencia de bienes de sus nietos en el país de origen.

En opinión de este Ararteko, la exigencia de esta documentación no ha sido ponderada adecuadamente por Lanbide, en la medida en que la ausencia de bienes de los nietos ya ha resultado suficientemente acreditada, y que el inventario de bienes aprobado por el juzgado hace innecesaria la exigencia de presentar cualquier otro documento justificativo de la carencia de bienes.

⁵ Véase también el artículo 17.2 de la Recomendación (2007)7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre buena administración.

⁶ *Íbid.*, apartado 4.1.2, p. 35.

⁷ **Euskadi. Ararteko.** Recomendación general del Ararteko 1/2014, de 20 de enero. Necesidad de motivación de las resoluciones limitativas de derechos por parte de Lanbide [en línea].

Disponible en: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3269_3.pdf



6. Por último, parece oportuno reseñar que no debe olvidarse que la reclamante es una mujer de 69 años, cuyos únicos ingresos, como consecuencia de todo lo aducido, han sido los 300 euros que percibe en concepto de PNC, y ello teniendo dos menores a su cargo.

Por consiguiente, esta institución tiene a bien insistir, nuevamente, en la necesaria consideración del interés superior del menor por parte de las administraciones públicas, cuando éstas vayan a adoptar decisiones que pueden afectar a niños y niñas. Así se puso de reflejo por esta institución en la Recomendación de carácter general 2/2015 sobre la obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos⁸. En la misma, se señalaba en síntesis que, a juicio de esta institución, con carácter previo a la resolución de suspensión y/o extinción de las prestaciones, se debería tomar en consideración y ponderar adecuadamente los efectos que podría implicar en la vida de las niñas y los niños una decisión administrativa que privara de ingresos a su unidad de convivencia.

En esta línea, cabe recordar que es la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, la que en su artículo 3 establece ese principio y derecho del interés superior del menor. En este contexto, el Ararteko tiene a bien trasladar que en el año 2013 el Comité de los Derechos del Niño, órgano encargado del seguimiento del cumplimiento por parte de los Estados firmantes de la Convención de Derechos del Niño y de ofrecer orientaciones para la adecuada interpretación de ésta en los distintos ámbitos en que debe ser implementada, elaboró y aprobó la Observación General n^o 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial⁹. La misma aclara, en su punto IV.A.1.b), que el respeto al principio del interés superior es exigible en las decisiones que afecten a los niños y niñas indirectamente; es decir, no solo en los actos administrativos dirigidos hacia ellos, sino también en aquéllos que puedan tener repercusiones en ellos, aunque no sean sus destinatarios directos.

⁸ **Euskadi. Ararteko.** Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril. La obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos [en línea]. Disponible en: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf

⁹ **Naciones Unidas. Convención sobre los derechos del niño. Comité de los derechos del niño.** Observación General n^o 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). [Accesible en línea]: http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC.C.GC.14_sp.pdf



A este respecto, parece oportuno añadir que Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, ha establecido en su artículo 31 que los tratados internacionales prevalecen sobre normas de derecho interno contrarias, y que el artículo 29 de la misma ley aclara que el cumplimiento de las obligaciones internacionales incumbe también a las autoridades autonómicas¹⁰.

No obstante, el carácter primordial del interés superior del menor ha tenido también reflejo en el ámbito estatal, en concreto, en los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, que incorporan y desarrollan el interés superior del menor, y dan pautas para su aplicación. En este sentido, el artículo 3 dispone expresamente la necesaria adecuación de la actuación de los poderes públicos a la referida normativa internacional. Y por su parte, el TC tiene establecido que la interpretación de los derechos fundamentales a la luz de los tratados de derechos humanos *“no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos mismos tratados y acuerdos internacionales”*¹¹.

7. Tal y como ha quedado explicado en la presente recomendación, la figura de la guarda de hecho está sometida, dado su carácter provisional, a una serie de medidas de control judicial, tanto de la persona como del patrimonio de los menores sometidos a guarda. Es por ello que la autoridad judicial exige a la reclamante que aporte al juzgado el inventario de bienes de sus nietos, y que rinda anualmente cuentas sobre su gestión.

Del expediente se extrae que aquélla dio debido cumplimiento a sus obligaciones, y que además puso a disposición de Lanbide, hasta en dos ocasiones, todos los documentos judiciales que relacionados con la guarda de los menores obraban en su poder. Documentos de los que, en cualquier caso, es posible constatar la inexistencia de recursos económicos de aquéllos.

Dicho lo cual, y en opinión de ese Ararteko, no parece razonable que, una vez acreditada la ausencia de recursos de sus nietos, Lanbide mantenga durante doce meses la suspensión de una prestación, y acuerde finalmente su extinción, porque la interesada no aporta copia exacta de un documento cuya finalidad no es otra que la de acreditar la carencia de recursos. Cabe decir que la medida resulta, en cualquier caso, desproporcionada.

¹⁰ Véase en este sentido la STC 87/2019, de 20 de junio, FJ 7.

¹¹ Véase en este sentido la STC 81/1989, FJ 2; STC 116/2006, FJ 5.



Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, el Ararteko formula al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco la siguiente:

RECOMENDACIÓN

Que deje sin efecto la resolución del director general de Lanbide que acuerda la suspensión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda de la reclamante, así como la que acuerda la posterior extinción, al haberse comprobado que la interesada ha acreditado ante Lanbide la carencia de recursos económicos de sus nietos; y que al hacerlo, considere de manera primordial el interés superior de los mismos, en aplicación de la normativa vigente.





Arartekoaren 2020R-1307-18 EBAZPENA, 2020ko uztailaren 14koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte politiketako Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala Lanbidek hartutako erabakia, erreklamaziogilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea etetea eta, ondoren, iraungitzea deklaritzen duena, prestazio horien titular izateko baldintzak betetzen dituela iritzita, eta, betiere, haren ardurapean dauden adingabeen interes goren aintzat hartuta:

Aurrekariak

1. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren (aurrerantzean, DSBE) eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriaren (aurrerantzean, EPO) titularra den pertsona batek Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, Lanbidek bi prestazioak berriro ordaintzen hasteko atzerapena oinarri hartuta, etete baten ondoren.

Azkenik, Lanbidek kexagilearen prestazioetarako eskubidea azkentzea erabaki zuen, prestazioak hamabi hilabete baino gehiagoz etenda eduki ondoren.

2. Kexagilea, jatorriz nigeriarra eta 69 urtekoa, bilobaren eta bilobaren zaintzailea da. Adingabeak dira, Nigeriakoak. Euskal Autonomia Erkidegoan bizi dira amonarekin, etorkizun hobea izateko. Hala eta guztiz ere, etenduraren ondoren, bizikidetz-unitatearen (aurrerantzean, BU) diru-sarrera bakarrak 300 euro ingurukoak ziren, interesdunak kotizazio gabeko prestazio gisa jasotzen zituenak.

Izatezko zaintzari dagokionez, erakunde honek egiaztatu ahal izan duenez, 2017ko irailaren 1eko 2515/2017 autoaren bidez, Bilboko Lehen Auzialdiko 14 zenbakiko Epaitegiak bere bilobaren eta bilobaren izatezko zaintzaile izendatu zuen, une horretan 11 eta 7 urtekoak, hurrenez hurren.

Auto horrek, lehenengo xedapenean, zaintzaile izendatuari eskatzen dio kargua onartu ondoren, dagokion ondasunen inbentarioa egin dezala. Gainera, honako hau adierazten du: *“deberá rendir cuentas anuales de su gestión a fecha 31 de diciembre de cada anualidad, dicha rendición consistirá en una relación detallada de los gastos e ingresos acaecidos en el patrimonio del menor, relación que habrá de ir acompañada de documentos originales justificativos de los mismos”*.

Era berean, erakunde honek egiaztatu ahal izan du kexagileak bere biloben zaintzaren titular gisa zituen betebeharrak bete zituela. Ondorioz, 2017ko





azaroaren 8an, epaitegi horrek adingabeen ondasunen inbentarioa onartzeko dekretua eman zuen, eta kexagileak 2017. urteko urriaren 18an aurkeztu zuen. 2018. urteko otsailaren 16an, aurkeztutako kontu-ematea onartu zuen auto bidez.

3. Kexa erakunde honetan aurkeztu zen unean, Lanbidek 2018ko apirilaren 21eko ebazpenaren bidez erabaki zuen Diru-sarrerak bermatzeko errenta/Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea aldi baterako etetea erakunde sustatzaileari, honako oinarri hauekin:

“No aclara la documentación requerida en el Trámite de Audiencia. Se le pide que aporte una copia del inventario de bienes de los nietos aportada en el juzgado de 1ª instancia nº 14 de Bilbao, y se limita a presentar el Auto nº 749/2018 que indica que aprueba la cuenta presentada”.

4. Hala ere, interesdunak argudiatzen zuen eskatutako dokumentazioa behin baino gehiagotan aurkeztu zuela Lanbiden.

Ildo horretan, kexa-espeditente hau osatzen duten dokumentuetatik ondoriozta daiteke interesdunak 1142/2017 izatezko zaintzako espeditentearen lekukotza aurkeztu zuela Zuzenean zerbitzuan 2018ko maiatzaren 25ean, Bilboko Lehen Auzialdiko 14 zenbakiko Epaitegian.

Agiri hauek daude bertan:

1. Kargua onartzeko akta, 2017ko urriaren 4koa.
2. Epaitegi horri zuzendutako idazkia, "Ondasunen inbentarioaren aurkezpena" izenburukoa, 2017ko urriaren 18koa, non ikusten baita ez dagoela ondasunik kexagilearen biloben izenean, horiek ez dutelako ez ondasunik ez banku-konturen titularririk.
3. Epaitegiaren 2017ko azaroaren 8ko Dekretua, aipatutako ondasunen inbentarioa onartzen duena.
4. Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak 2018ko maiatzaren 11n emandako ziurtagiria, zeinaren arabera kexagilearen bilobak ez baitira ez ondasunaren ez banku-kontuaren titularrak.
5. Hori esanda, adierazi behar da kexa honen sustatzaileak formalki eskatu zuela prestazioak ordaintzen hasteko 2018ko uztailaren 2an, Lanbidek egindako errekerimenduaren ondorioz bete zuela iritzita.





6. Planteatutako kehari izapide egokia emate aldera, Arartekoak lehen lankidetz-eskaera igorri zion Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte politiketako Sailari. Bertan, prestazioak berriz ordaintzen hasteko datari buruzko informazioa eskatu zuen, prestazioak jasotzeko eskubidea etetea eragin zuen arrazoia bertan behera geratu zela ulertuta.
7. Lankidetz-eskaera horri erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiaren idazki bat sartu zen erakunde honen erregistroan. Idazki horrek Arartekoari jakinarazi zion erakunde horrek kexagilearen Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea etenda mantentzen zuela, eskatutako dokumentazioa oraindik aurkeztu ez zuela uste zuelako.

Ildo horretan, laburbilduz, Lanbideko zuzendari nagusiak honako hau helarazi zion Arartekoari:

*“Lanbideri aurkeztu zaion dokumentu bakarra epaitegi bereko 749/2018 autoa da, eta, auto horren arabera, **“Betetzat jotzen egoeraren eta beren ondasunen administrazioaren urteko kontua errendatzeko betebeharra”***

*Eskatzen zaion dokumentazioa, ordea (eta berriz diogu), honako hau da: **“Bilboko Lehen Auzialdiko 14. Epaitegian aurkeztutako ondasunen inbentarioaren kopia, kontuan hartuta EPAITEGIAN AURKEZTUTAKOAREN KOPIA ZEHATZA izan beharko duela. Epaitegian ere eska dezake inbentarioaren kopia bat”.***

Uste dugu dokumentazio hori eskatzea ez dela inolaz ere gehiegikeria bat, Lanbideren betebeharra baita blzikidetz-unitatea osatzen duten pertsonen ondarea egiaztatzea”.

8. Bestalde, kexa-espeditatea osatzen duen dokumentaziotik ondorioztatzen da Lanbidek, 2018ko uztailaren 10eko entzunaldi-izapidearen bidez, berriro eskatu ziola kexagileari epaitegian aurkeztutako ondasunen inbentarioaren "kopia zehatza".

Kexagileak dioenez, une horretan berriz ere aurkeztu zuen biloben ondasunen gabezia egiaztatzen duen dokumentazioa, laugarren aurrekarian zerrendatua. Eta horrela ondorioztatzen da Lanbidek 2018ko uztailaren 23an igorritako entrega-frogagiritik. Ondorioz, 2018ko uztailaren 20an, erreklamaziogileak prestazioak berriz jasotzen hasteko eskatu zuen berriro.

9. Azaldutakoa gorabehera, Lanbidek jakinarazpen hauek eman zizkion eskura interesdunari 2019ko urtarrilaren 7an: entzunaldi-izapide baterako errekerimendua, 2018ko irailaren 25ekoa, eta prestazioetarako eskubidearen





etendurari eusteko ebazpena, abenduaren 19koa, honako hauetan oinarritzen zena:

"- No aportar en plazo la documentación requerida. Se le requiere documentación y no la aporta, publicado el requerimiento en el BOE del día 05-11-2018. Se mantiene la suspensión.

- Por desconocimiento de la situación actual por no responder a Trámite de Audiencia. Publicado en el BOE del día 05-11-2018. Se mantiene la suspensión".

Antza denez, eta espedientetik ateratzen denaren arabera, 2018ko irailaren 25ean entzunaldi-izapidea ireki zen, errekurtsogileak bi biloben jatorrizko herrialdeko kontu-mugimenduak eta ondasunen ziurtagiriak aurkez zituan.

Hala ere, kexagileak adierazi zuen ez ziotela izapide hori jakinarazi. Izan ere, aldi horretan ibiltzeko zailtasunak zituela adierazi zuen, eta, beraz, ez zela etxetik atera, eta, horregatik, ziur zegoela ez zuela Lanbideren jakinarazpenik jaso.

10. Ondoren, kexa-espediente hau izapidetzen ari zela, kexagileak erakunde honi jakinarazi zion prestazioak azkentzeko prozedura hasi zela prestazioaren bi urteko indarraldian bi etenaldi zeudelako, betebeharrak ez betetzeagatik.

Hala ere, zegozkion alegazioak aurkeztu ondoren, kexagileak Lanbideren beste ebazpen bat jaso zuen, 2019ko martxoaren 20koa, prestazioen aldi baterako etendura mantentzen zuela jakinarazten ziona, nahiz eta honako hau ezartzen zuen (espediente-zenbakia : 2019/REV/003862):

"Etenaldiarekin jarraitzen duen iraungitzeko prozedura hasierari egindako alegazioak baiestea".

11. Azkenik, 2019ko apirilaren 11n, Lanbidek azkentze-prozedura bat hasi zela jakinarazi zion, *12 hilabetetik gorako etenaldi jarraituari eusteari buruzko 18/2008 Legearen 28.1.d) artikuluan xedaturikoa aplikatuta".* 2019ko maiatzaren 24an erabaki zen azkentzea.

12. Azaldutakoan oinarrituta, oraindik nahasmen maila bat zuten zenbait alderdi argitze aldera, Arartekoak bigarren lankidetzeta-eskaera bat helarazi zion Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte politiketako Sailari. Zehazki, honako alderdi hauei buruzko informazioa eskatu zuen:





- Lanbidek aipatutako 2018ko iraileko entzunaldi izapidea jakinarazteko ahaleginen eta EHAAn egindako argitalpenaren kopia, kexagilearen prestazioen etenaldiarekin jarraitzeko (2018/REV/095526).
- Arrazoi horiek direla eta mantendu du etenda Lanbidek epealdi honetan kexagileak prestazioak jasotzeko duen eskubidea, askotariko dokumentazioa aurkeztu duen arren eta, bestalde, espediente judizialean jasota agertzen den bakarra dena.
- Espedientea zer egoeratan dagoen aukerako berraztertze errekurtsoa aurkeztu ondoren, noiz ebatziko den errekurtso hori eta, hala badagokio, ebazpenaren kopia.
- Iraungitzeko prozeduran alegazioak zergatik baietsi diren baina diru-sarrerak bermatzeko errenta etenda jarraitzeko erabakia hartu den, eta iraungitzeko beste prozedura bat zergatik abiarazi den etenaldiarekin 12 hilabetez jarraitzeagatik.
- Ea aintzat hartu duen adingabearen interes gorenaren lehentasuna.
- Kexaren xedeari lotuta dagoen eta gure jardunerako interesgarria izan daitekeen beste edozein inguruabar.
- Aurretik bidalitako gogoeten gainean duzun iritzia.

Era berean, gogoeta berriak egin zituen, beharrezkoak ez diren errepikapenak saihesteko hemen errepikatutzat jotzen direnak.

13. Lankidetzako bigarren eskaera horri erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiaren idazki bat sartu zen Arartekoaren erregistroan, adostutako azkentzea berresten zuena eta, gainera, honako hau adierazten zuena:

*“Prestazioa 2018ko apirilaren 1etik aurrera eten zitzaion, eskatutako agiriak ez zituelako aurkeztu bi aldiz eskatu eta gero. Zehazki, honako hauek dira aurkeztu behar zituen agiriak: **BERE BILOBEN ONDASUNEN INBENTARIOA**, Lehen Auzialdiko 14. zenbakiko Epaitegiak (familia) eskatutakoari jarraikiz.*

(...) jaunak berraztertze errekurtsoa aurkeztu zuen 2019ko otsailaren 7an, eta ezetsi egin zen. Ebazpena erantsi dugu:

*Urtebetez prestazioa etenda eduki eta gero, berrikuspen-automatiko bat abiarazi zen. Azkenik, prestazioa jasotzeko eskubidea azkentzea erabaki zen **18/2008ko Legearen 28.1.d artikuluan ezarritakoa aplikatzearen ondorioz: 12 hilabete jarraian baino gehiago etenda egotea”.***

Gero, (...)k berraztertze beste errekurtso bat aurkeztu zuen, ezetsia izan zena. Ebazpena erantsi dugu”.





14. Azkenik, adierazi behar da Lanbidek 2019ko azaroaren 27an erakunde honetara bidali zuen txostenak, Arartekoko eta erakunde autonomoko langileen arteko bilera baten ondoren, berriz ere adierazten duela prestazioen azkentzearen arrazoia dela kexagileak denbora horretan guztian ez zuela aurkeztu bizikidetzaren ondarea eta diru-sarrerak ezagutzeko eskatutako dokumentazioa.

"Azpimarratu behar da ezen, Lanbidek eskatutako eta interesdunak aurkeztu gabeko dokumentuen artean, aurreko erantzunetan aipatu dugun ondasunen inbentarioaz gain, administratuaren biloben kontu korronteetan izandako mugimenduak ere daudela, eta horiek behar den tresna baino ez direla jakiteko zein diren bizikidetzaren ondarea eta diru-sarrerak, eta, horrenbestez, erabakitzeko interesdunak eskubidea duen ala ez DSBE eta EPO laguntza ekonomikoak jasotzeko".

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho suficientes, se emiten las siguientes:

Gogoetak

1. Kexagileak biloben izatezko zaintza du esleituta, Bilboko Lehen Auzialdiko 14 zenbakiko Epaitegiaren 2017ko irailaren 1eko 2515/2017 autoaren bidez.

Izatezko zaintzaren erakundea, gaur egun, Kode Zibila (aurrerantzean, Kode Zibila) argitaratzen duen 1889ko uztailaren 24ko Errege Dekretuaren 303., 304. eta 306. artikuluetan araututa dago.

Izatezko zaintza adingabeak babesteko mekanismo behin-behinekoa eta iragankorra da, Auzitegi Gorenaren 2014ko urriaren 27ko 582/2014 epaiak bederatzigarren oinarri juridikoan laburbiltzen duen bezala¹².

Behin-behinekoa eta iragankorra denez, Kode Zibilaren 303.1 artikulua, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legearen 2. artikulua 28. paragrafoak emandako bertsioan, adingabea informatzeko, kontrolatzeko eta zaintzeko neurri judizial batzuk jasotzen ditu, behin betiko babesa eman arte. Hala, artikulua horrek aurreikusten du agintaritzaren judizial eskudunak egitatezko zaintza esleituta duen

¹² FJ 9: *"Zalantzarik gabe, zaintza adingabeak babesteko mekanismotzat hartzen da, baina, era berean, ordenamendu juridikoak behin-behinekotzat eta iragankortzat hartzen du, adingabeak modu egonkorrean babesteko aurreikuspenak eginez".*



pertsonari eska diezaiokeela informazioa eman dezala ondasunen egoerari buruz eta adingabearen pertsonari buruz, bai eta ondasunekin lotuta izandako jarduketari buruz ere¹³.

Ildo horretan, kexagilea biloben izateko zaintzaile izendatzeko autoak adingabeen ondasunen inbentarioa formalizatzeko betebeharra ezarri zuen, bai eta egindako kudeaketaren urteko kontuak ematekoa ere.

Egokia dirudi orain gogoraraztea kexagileak bere betebeharrak bete zituela. Eta, ondorioz, 2017ko azaroaren 8an epaitegiak adingabeen ondasunen inbentarioa onartzeko dekretua eman zuen. 2018ko otsailaren 16an, aurkeztutako kontu-ematea onartu zuen, auto bidez.

2. Aurrekariak irakurrita ondoriozta daitekeenez, sakoneko gaia, kasu honetan, interesdunak eta haren bilobek osatzen duten bizikidetz-unitateak dituen baliabide ekonomikoak ezagutzeko beharrari buruzkoa da. Horretarako, Lanbidek behin eta berriz eskatzen dio interesdunari epaitegian aurkeztutako ondasunen inbentarioaren kopia zehatza aurkez dezala, eta aipatutako dokumentuaren eskakizuna justifikatzen du, bizikidetz-unitatearen ondarea egiaztatu behar delako, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea duen ala ez erabaki ahal izateko.

Ildo horretan, Arartekoak uste du Lanbidek egiaztatu behar duela interesdunaren bizikidetz-unitatea duela, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular izateko baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko. Ildo berean, gaineratu behar da Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 29. artikulua m) letrak ahalmena ematen diola Administrazioari egokitzat jotzen dituen dokumentuak eskatzeko, *"Baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko"*.

Hala ere, zaila da ulertzea zergatik den behin eta berriz aipatutako inbentarioaren kopia zehatza, baliabiderik eza behar bezala egiaztatu denean. Lehenik eta behin, hala ondorioztatzen delako "ondasunen inbentarioa aurkeztea" izeneko idazkian. Epaitegiaren dekretu bidez onartu zen, eta Lanbideri birritan ere aurkeztu zitzaion. Eta bigarrenik, hala ondoriozta daitekeelako Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak 2018ko

¹³ Kode Zibilaren 303.1. artikulua: *"203 eta 228. artikuluetan xedatutakoari kalterik egin gabe, agintaritza judizialak egitezko zaintzailerik badela jakin dakienean, zaintzaile horri eska diezaioke informazioa eman dezala, dela adingabearen edo ustezko ezgaiaren egoerari buruz eta hark dituen ondasunen egoerari buruz, dela zaintzaileak haienganako izan duen jardunari buruz; era berean, epaileak kontrol- eta jagoletzaneurriak ezar ditzake bere ustez horiek egokiak badira"*.



maiatzaren 11n emandako ziurtagiria ikusita, Zuzenean zerbitzuan maiatzaren 25ean aurkeztua. Eskatutako ondasunen inbentarioa egitatezko zaintzaren espediente judizialari erantsi zitzaion; beraz, interesdunak Lanbideri azken horren lekukotza bat eman dio, eta, horren ondorioz, legeak prestazioen titular izateko eskatzen duen baliabiderik ez duela egiaztatu da.

Egokia dirudi orain gogoraraztea Auzitegi Gorenak, Administrazioarekiko Auzien Salak 1997ko uztailaren 7an emandako epaian, honako hau adierazten duela:

"...la Administración no puede arbitrariamente exigir cualquier documentación, sino aquella que sea indispensable para fijar los datos en base a los cuales ha de dictarse la resolución"¹⁴

Nolanahi ere, arrazoizkoa dirudi Lanbideren erabakiaren proportzionaltasun falta zalantzan jartzea; izan ere, adierazitakoaren arabera, interesdunak ez du betetzen errekerimendu zehatza, lehenik eta behin etendura erabakitzen du, eta hamabi hilabete igaro ondoren, azkenean, haren prestazioak azkentzea erabakitzen du; 69 urteko emakume bat da, eta bi adingabe ditu ardurapean. Diru-sarrera bakarrak 300 euro ingurukoak ziren.

3. Bestalde, erakunde honek agerian jarri nahi ditu orain dagokigun gaien prozedura-arloan ikusten diren gabezia garrantzitsuak.

Hala, lehenik eta behin, esan behar da Lanbidek kexagilearen prestazioen etendura mantentzea erabaki zuela, "Eskatutako dokumentazioa epe barruan ez aurkezteagatik" eta, horrekin batera, 2018ko irailaren 25eko "egungo egoera ez ezagutzeagatik, entzunaldi-izapideari ez erantzuteagatik". Ebazpen hori eskura eman zitzaion interesdunari 2019ko urtarrilaren 7an.

Hala ere, aurrekarietan adierazi den bezala, kexaren sustatzaileak ziurtatu zuen entzunaldi-izapide hori ez zitzaiola jakinarazi. Erakunde horrek berariaz eskatu zion Lanbideri saiakerei buruzko informazioa. Hala eta guztiz ere, erakunde autonomoak ez du erantsi erakunde honi igorritako txostenetan xede horretarako jarraitu zen jakinarazpen-prozedurari buruzko dokumenturik.

Ilido horretan, Arartekoak gogorarazi nahi du, erakunde hori sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 23. artikuluekin bat etorritz, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte politiketako Sailak "eskatzen zaizkion datu,

¹⁴ **Auzitegi Gorena.** Roj: AGE 4804/1997. [ECLI:ES:TS:1997:4804](https://www.boe.es/boe-datos/boe-1997-4804).



dokumentu, txosten edo argibide guztiak lehentasunez eta presaz aurkezteko betebeharra" duela.

Aurretiazko entzunaldiaren izapideari dagokionez, Lanbidek 2017ko¹⁵ diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako errenta osagarriari buruzko hobekuntza-proposamenak jasotzen dituen diagnostiko-txostenean adierazi genuen bezala, Arartekoak jarrera bermatzailea izan du, eta horren garrantzia defendatu du, bai baldintzak galtzen direlako zantzuak daudenean, bai betebeharrak betetzen ez direnean.

Diru-sarrerak bermatzeko errenta bazterketa-egoeran edo -prozesuetan dauden pertsonen premia oinarrizkoenei aurre egiteko erabiltzen da, eta, beraz, ordainketa eteteak arrazoi sendoak izan behar ditu, eta aldez aurretik jakinarazi behar zaizkio horrelako erabaki baten eraginpean egon daitekeen pertsonari. Egitateak eta haren oinarri diren lege-oinarriak ezagutzeak aukera ematen die beren defentsarako alegazioak aurkezteko.

Gainera, ildo horretan, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 4. atala (53. artikulua eta hurrengoak), diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko edo azkentzeko prozeduren arau komunak ezartzen ditu. Hemen, 53.2 artikulua aurreikusten du entzunaldi-izapide bat egitea dagokion ebazpena eman aurretik.

Horrez gain, eta orain arte hirugarren gogoeta honetan xedatutakoarekin lotuta, gogorazi behar da ezen, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 42.2 artikulua arabera (aurrerantzean, 39/2015 Legea), paperezko jakinarazpenak egiteko honako aurreikuspen hauek bete behar direla:

"Jakinarazpena interesdunaren bizilekuan egiten denean, jakinarazpena entregatzeko unean interesdunik ez badago, egoitzan dagoen hamalau urtetik gorako edozein pertsonak har dezake, nor den jasota uzten badu. Inork ez badu jakinarazpena bere gain hartzen, horren berri emango da espedientean, jakinarazpena egiten saiatu zen eguna eta ordua adierazita. Hurrengo hiru egunetan, beste ordu batean eta behin bakarrik egingo da ahalegina. Lehenengo jakinarazpen-ahalegina 15: 00ak baino lehen egin bada, bigarren ahalegina 15:00ak baino geroago egin beharko da, eta

¹⁵ **Euskadi. Arartekoa.** Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako errenta prestazioak kudeatzeari buruzko hobekuntza proposamenak biltzen dituen txosten-diagnostiko [linean]. Gasteiz: Arartekoa, 2017, 33 eta 34. orr. Eskuragarri: <http://www.ararteko.eus>



alderantziz; nolahi ere, jakinarazpen-saiakera bien artean gutxienez hiru orduko tartea utzi beharko da. Bigarren saiakerak ere emaitzarik ez badu, 44. artikuluan aurreikusitako moduan jardungo da".

4. Era berean, egokia dirudi adieraztea Lanbideren jardunak defentsa-gabezia eragin ahal izan diola interesdunari, jasotako jakinarazpenen azterketatik sortutako segurtasun juridikorik eza ondorioztatzen delako.

Hala, Lanbideren ebazpen horrek, 2019ko martxoaren 20koak, erreklamaziogileari jakinarazi zion prestazioen aldi baterako etendura modu nahasi, kontraesankor eta oinarrigabeen mantenduko zela: *"Azkentzea hasteko prozedurari egindako alegazioak baiestea, etendura mantenduz"*.

Illo horretan, gogorarazi behar da edozein administrazio-egintza arrazoitzeak berekin dakarrela hartutako erabakiaren oinarri diren arrazoiak adieraztea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 35. artikulutik ondorioztatzen den bezala¹⁶. Gainera, funtsezkoa da administrazioaren diskrezionalitatea kontrolatzeko, baita funtsezko betekizuna ere, ikuskatzea ahalbidetzeko eta pertsonen defentsa-gabezia saihesteko, bestela, administrazioaren erabakiei aurre egiteko argudiorik gabe gera baitaitezke.

Arartekoak askotan adierazi du ebazpenen arrazoiak hobetu behar direla, gertakariak eta zuzenbideko oinarriak labur aipatuta, bai kexa-espeditentak izapidetzean, bai 2017ko Txosten-Diagnostikoan.¹⁷ Gainera, Arartekoaren urtarrilaren 20ko 1/2014 Gomendio Orokorren¹⁸, xedea izan zen, non ebazpenen arrazoitzearen garrantzia aztertzen zen, administrazio ona izateko eskubidearen berme gisa.

Horregatik guztiagatik, Arartekoak berriro azpimarratzen du administrazio-ebazpenak behar bezala arrazoitu behar direla, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidearen titularrei beharrezko informazioa helarazteko, beren eskubideak mugatzen edo murrizten dituztenen aurka defendatu ahal izan daitezen.

¹⁶ Ikus, halaber, Europako Kontseiluko Ministroen Batzordearen Administrazio Onari buruzko Gomendioaren (2007) 17.2 artikulua.

¹⁷ *Ibid.*, 4.1.2. atala, 35 or.

¹⁸ **Euskadi. Arartekoa.** Arartekoaren 1/2014 Gomendia, urtarrilaren 20koa. Lanbideak eskubideak mugatzen dituzten ebazpenak arrazoitu beharra [linean]. Eskuragarri: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3269_1.pdf



5. Ildo horretan, egokia dirudi eranstea espediente hau izapidetzean ikusi dela Lanbidek interesdunari eskatu dion dokumentua, une oro, biloben ondasunen inbentarioa izan dela. Hala ere, 2018ko irailaren 25eko entzunaldi-izapiderako errekerimenduan, jatorrizko herrialdean bilobek ondasunik ez dutela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkezteko eskatzen zaio.

Arartekoaren iritziz, Lanbidek ez du dokumentazio horren eskakizuna behar bezala haztatu, biloben ondasunik eza nahikoa egiaztatuta dagoelako, eta epaitegiak onetsitako ondasunen inbentarioak ez duelako eskatzen ondasunik ez dagoela justifikatzeko beste agiririk aurkeztea.

6. Azkenik, egokia dirudi aipatzea ez dela ahaztu behar erreklamaziogilea 69 urteko emakume bat dela, zeinaren diru-sarrera bakarrak, adierazitako guztiaren ondorioz, kotizaziorik gabeko prestazio gisa jasotzen dituen 300 euroak izan baitira, eta hori bere kargura bi adingabe dituela.

Horrenbestez, erakunde honek berriz ere azpimarratu nahi du administrazio publikoek adingabearen interes gorena kontuan hartu behar dutela, haurrengan eragina izan dezaketen erabakiak hartu behar dituztenean. Hala adierazi zuen erakunde honek 2/2015 Gomendioan, politika publikoetan eta, bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sisteman adingabearen interes gorena nahitaez kontuan hartzeari buruzkoan¹⁹. Bertan, laburbilduta, adierazten zen ezen, erakunde honen iritziz, prestazioak eteteko eta/edo azkentzeko ebazpena eman aurretik, kontuan hartu eta behar bezala haztatu beharko liratekeela beren bizikidetzak unitateari diru-sarrerak kentzen dizkion administrazio-erabaki batek haurren bizitzan izan ditzakeen ondorioak.

Ildo horretan, gogorarazi behar da Nazio Batuen Haurren Eskubideen Konbentzioak, 1989ko azaroaren 20koak, ezartzen duela 3. artikuluan adingabearen interes gorenaren printzipio eta eskubide hori. Testuinguru horretan, Arartekoak adierazi nahi du 2013an Haurren Eskubideen Komiteak, Haurren Eskubideen Konbentzioa sinatu duten estatuak betetzen duten jarraipena egiteaz eta hura behar bezala interpretatzeko orientabideak emateaz arduratzen den organoak, haurren interes gorena izateko eskubideari buruzko 14. ohar orokorra egin eta onartu zuela.²⁰ Funtsezko kontsiderazioa Lege

¹⁹ **Euskadi. Arartekoa.** Arartekoaren 2/2015 Gomendia, apirilaren 8koa. Adingabearen interes gorena nahitaez kontuan hartzea politika publikoetan eta, bereziki, diru-sarrerak bermatzeko [linean].

Eskuragarri: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3662_1.pdf

²⁰ Nazio Batuak. Haurren eskubideei buruzko Konbentzioa. Haurren eskubideen batzordea. 14. ohar orokorra (2013), haurrak bere interes gorena funtsezko kontsiderazioa izateko



horrek, IV.A.1.b) puntuan, argitzen du interes gorenaren printzipioarekiko errespetua eska daitekeela haurrei zeharka eragiten dieten erabakietan; hau da, ez bakarrik haurrei zuzendutako administrazio-egintzetan, baita haiengan eragina izan dezaketenetan ere, zuzeneko hartzaileak izan ez arren.

Horri dagokionez, egokia dirudi gehitzea azaroaren 27ko 25/2014 Legeak, Nazioarteko Tratatu eta Akordioei buruzkoak, 31. artikuluan ezarri duela nazioarteko tratatuek lehentasuna dutela kontrako barne-zuzenbideko arauen gainetik, eta lege horren 29. artikulua argitzen duela nazioarteko betebeharrak betetzea agintari autonomikoei ere dagokiela.²¹

Hala ere, adingabearen interes gorenaren funtsezko izaera Estatuan ere islatu da, zehazki, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko 1/1996 Lege Organikoaren 2. eta 3. artikuluetan, adingabearen interes gorenari jasotzen eta garatzen baitute, eta hura aplikatzeko jarraibideak ematen baitituzte. Ildo horretan, 3. artikulua berriaz xedatzen du botere publikoen jardura nazioarteko araudi horretara egokitu behar dela. Eta, bestalde, Konstituzio Auzitegiak ezarrita dauka oinarriko eskubideen interpretazioak, giza eskubideen tratatuen argitan, *"Ezin duela alde batera utzi nazioarteko tratatu eta akordio horietan ezarritako berme-organismoek gauzatzen dutena"*.²²

7. Gomendio honetan azaldu den bezala, izatezko zaintzaren figura, behin-behinekoa denez, kontrol judizialeko neurri batzuen mende dago, bai pertsonarena, bai zaintzaren pean dauden adingabeen ondarearena. Horregatik, agintaritzak judizialak kexagileari eskatzen dio bere biloben ondasunen inbentarioa epaitegira ekartzeko, eta urtero horren kudeaketari buruzko kontuak emateko.

Espedientetik ondorioztatzen denez, hark bere betebeharrak bete zituen, eta, gainera, Lanbideren esku jarri zituen, bi aldiz, adingabeen zaintzarekin zerikusia zuten dokumentu judizial guztiak. Edonola ere, agiri horien bidez egiazta daiteke ez dagoela baliabide ekonomikorik.

Hori esan ondoren, eta Arartekoaren iritziz, ez dirudi zentzuzkoa denik, behin bilobek baliabiderik ez dutela egiaztatuta, Lanbidek hamabi hilabetez prestazio baten etendura mantentzea, eta azkentzea erabakitzea, interesdunak ez baitu

duen eskubideari buruzkoa (3. artikulua, 1. paragrafoa). [Linean eskuragarri]: http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC.C.GC.14_sp.pdf

²¹ Ikus bedi KAE 87/2019, ekainaren 20koa, FJ 7.

²² Ikus bedi AKE 81/1989, FJ 2; KAE 116/2006, FJ 5.





aurkeztu baliabiderik ez duela egiaztatzea beste helbururik ez duen dokumentu baten kopia zehatza. Nolanahi ere, neurria neurritz kanpoko da.

Horregatik guztiagatik, bat etorritz erakunde hau sortu zuen eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 11 b) artikuluan ezarritakoarekin, Arartekoak honako gomendio hau egiten dio Enplegu eta Gizarte Politika Sailari:

GOMENDIOA

Ondoriorik gabe uztea Lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpena, kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria etetea erabakitzen duena, baita ondoren azkentzea erabakitzen duena ere, zeren eta egiaztatu baita interesdunak Lanbideren aurrean egiaztatu duela bilobek baliabide ekonomikorik ez dutela, eta, hori egitean, funtsezkotzat jotzen duela haien interes gorena, indarrean dagoen araudia aplikatuz.

